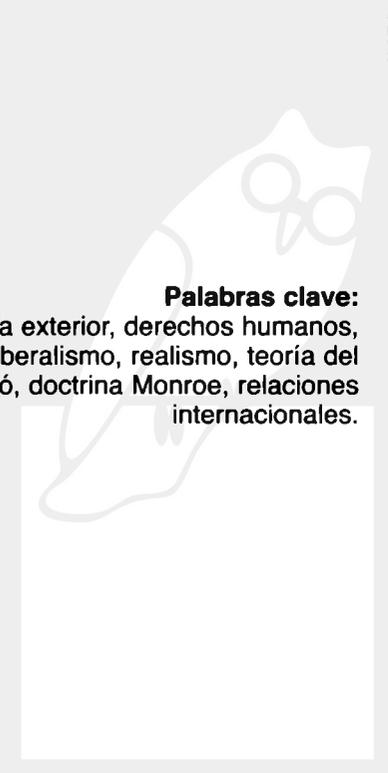


El Salvador: ¿fue honesta la política exterior de derechos humanos de Jimmy Carter?

Rafael Romero*



Palabras clave:
política exterior, derechos humanos,
liberalismo, realismo, teoría del
dominio, doctrina Monroe, relaciones
internacionales.

Resumen

En este artículo se demostrará que el supuesto énfasis en el respeto a los derechos humanos de la política exterior del expresidente estadounidense Jimmy Carter fue de naturaleza demagógica. En sus relaciones internacionales, su retórica fue de carácter liberal, pero su accionar fue determinado por el realismo. Su política exterior de derechos humanos fue una medida cosmética que persiguió el mantenimiento de la hegemonía estadounidense sobre los países bajo su dominio, al tiempo que la presentaba como respetuosa de la soberanía de los sometidos. Aquí se dará particular atención al caso de El Salvador.

* Curtin University, Australia

Introducción

Para poder entender mejor el impacto de la política exterior de Jimmy Carter en El Salvador, es pertinente empezar por describir y analizar cómo esa política exterior se inició con expectativas globales. Carter empezó su campaña electoral apuntando su artillería política contra administraciones estadounidenses previas. En sus discursos denunció lo que él consideró una decadencia moral y abuso de autoridad por parte de varios de sus antecesores. Por ejemplo, criticó a Johnson por haber iniciado la guerra contra Vietnam; y a Nixon por haberla continuado. Pero una vez que fue electo, Carter justificó esa guerra genocida argumentando que la destrucción no fue causada solo por los EE. UU. Pero con esa inaceptable justificación, Carter ignora deliberadamente que no fue Vietnam quien declaró la guerra a los EE. UU. y que su pueblo no fue el agresor (Laderman, 2010, p. 90). Contra Nixon, Carter también arremetió por el escándalo mundialmente conocido como Watergate. Nixon fue encontrado culpable de haber abusado de su posición como presidente para espiar a sus rivales políticos, de haber obstruido el curso de la investigación, de haberle mentado a todo su pueblo y de haber abusado de la confianza que al puesto de presidente le otorgaba la Constitución de su propio país (Lang and Lang, 1980, pp. 530-532; Stathis, 1983, pp. 130-132; Dunham and Mauss, 1976, pp. 485-488; Sorensen, 1974, pp. 497-498).

Carter prometía, en su campaña electoral, una nueva forma de coexistir pacíficamente con el resto del mundo. Censuró las políticas guerreristas y expansionistas de sus antecesores (Lowenthal, 1983, p. 65). El llamado "síndrome de Vietnam" continuaba fresco en la mente de millones de potenciales votantes estadounidenses. Para varios analistas, este síndrome significa algo diferente, aunque cada interpretación sea desmoralizante. Sin embargo, los análisis coinciden en que en Vietnam, los EE. UU. fueron derrotados militar y políticamente, por primera vez.

Esa derrota terminó con el mito de que los EE. UU., por muy poderosos que fueran, no eran invencibles.

Aún más, el hecho de que miles de soldados estadounidenses hayan retornado con vida a los EE. UU., aunque lisiados para siempre, le agregó más carbón al fuego. Todos esos aspectos produjeron síntomas sociales que generaron el síndrome mencionado. En otras palabras, no más involucramiento militar de los EE. UU. en otros países. A nuestros soldados les obligan a disparar, pero los que reciben nuestras balas también tienen que responder de la misma forma: era el pensamiento civil en los EE. UU. de la postguerra contra Vietnam. El síndrome de Vietnam implicaba que, para que hubiera paz, los EE. UU. tenían que renunciar a su política militar-expansionista. Eso lo pedía no solo el mundo dentro y fuera de la Casa Blanca, sino también las potenciales y futuras víctimas regionales o globales. Ya no había que ser David, para derrotar a Goliat. Pero Goliat trataría, por cualquier medio, de demostrarle a David que él seguía siendo Goliat. Esa posición simplemente atizaba el síndrome de Vietnam (Mariani, 2011, pp. 9-20; Modell and Haggerty, 1991, pp. 207-210).

El electorado estadounidense estaba saturado de ilegalidades e inmoralidades cometidas por quienes habían sido electos para representarlos. Ese pueblo no quería más involucramientos militares estadounidenses en ningún cuadrante. Así como morían seres humanos a manos de soldados estadounidenses, así también se exponían las vidas de esos mismos soldados. Por criminal que fuera la conducta de estos, eran obligados desde la Casa Blanca a ir a matar a "supuestos" enemigos que ni siquiera conocían. Ni los padres de un soldado criminal ni los padres de sus futuras víctimas deseaban más escenarios sangrientos. La retórica electorera de Carter hacía hincapié en unas relaciones internacionales respetuosas de la soberanía de otros estados internacionales, en paralelo con la promoción del respeto a los derechos humanos. De acuerdo a sus argumentos, esa era la

panacea universal que los alquimistas políticos que le habían precedido no habían descubierto. Carter fue electoralmente astuto y capitalizó en los puntos débiles de su propio electorado. La putrefacción política en los EE. UU. ya no se podía ocultar. Esa fetidez política sirvió, hasta cierto punto, para abrirles los ojos a bastantes potenciales electores pensantes. Jimmy Carter no pudo haber llegado en un mejor momento; y se presentó como un pacifista y reformador por naturaleza (Sick, 1985, p. 173).

Prácticamente, Carter se presentó a sí mismo como el mesías mundial de los derechos humanos y de la coexistencia pacífica. Para agregarle una dosis más a su insinuado mesianismo, Carter siempre recalcó en su campaña electoral su profundo cristianismo y su supuesta cuna humilde, por venir de unos terratenientes que cultivaban maní (cacahuetes). Carter fue electo el presidente número 48 de los Estados Unidos de América, del 20 de enero de 1977 hasta el 20 de enero de 1981. En un discurso que dio en la Notre Dame University el 22 de mayo de 1977, Carter afirmó que un nuevo mundo necesitaba una nueva política exterior de parte de su país. Para tal efecto, afirmó el cometido de su administración en los derechos humanos fundamentales de todo ser humano. Varios autores presentan a Carter como un presidente estadounidense pionero en la promoción del respeto a los derechos humanos y la paz universal (Stohl, Carleton and Johnson, 1984, p. 261). Por ejemplo, le atribuyen la firma del acuerdo conocido como "Camp David" en 1979, tratado que teóricamente terminaba las belicosidades entre el Estado de Israel y Egipto (Bickerton and Pearson, 1991, p.44). El tiempo demostró que, para el Estado de Israel, "el papel aguantaba con cualquier tratado", mientras hubiera tinta suficiente y toda vez que nadie se interpusiera en su geopolítica expansionista sobre la tierra de Palestina.

Carter sabía que ese acuerdo era cosmético, pero lo magnificó como un triunfo de su política exterior. Las personas no pensantes, digirieron esa "conquista" pacifista con suma

facilidad. Los acuerdos de Camp David, nunca pusieron el dedo en la llaga. La verdadera llaga radicaba y sigue radicando en el ilegal expansionismo israelí sobre la tierra que le pertenece al pueblo de Palestina. Ahora, los palestinos que pelean por recuperar sus tierras o, al menos, por impedir que los israelíes no les quiten más de lo que legalmente les pertenece son tildados de terroristas o de gente que no ama la paz. La varita mágica de la prensa internacional, la que decide quién es terrorista y quién no sigue siendo guardada en la Casa Blanca. Carter nunca fue ajeno a ese tipo de realidades. Pero eso de ninguna manera implica que Carter no hubiera tenido apoyo de gente no pensante y hasta de algunos pseudoacadémicos.

Por ejemplo, de acuerdo a Hutcheson, "Carter fue el presidente teológicamente más letrado desde Woodrow Wilson" (1988, p. 109). En opinión de Brinkley, "Carter se convirtió en el primer presidente de los EE. UU., desde Woodrow Wilson, que activamente intentó reformar los regímenes represivos en otras naciones" (1998, p. 19). Hargrove afirma que "Carter vio a los EE. UU. como un faro por los ideales de democracia y derechos humanos, así como Woodrow Wilson" (1988, p. 168). Carter es presentado como la reencarnación de este (McKormic, 2004, p. 205). Pero esos pseudoacadémicos con sus argumentos en favor de Carter solo le hacen un flaco favor al compararlo con Woodrow Wilson (presidente de los EE. UU. del 4 de marzo de 1913 al 4 de marzo de 1921), pues este ordenó invasiones y ocupaciones militares estadounidenses contra México, República Dominicana, Nicaragua y Haití, durante su administración. Incluso, durante la fallida consolidación de la Liga de Naciones (precursora de la actual Organización de las Naciones Unidas), Woodrow Wilson presionó, infructuosamente, para que la doctrina Monroe fuera incluida como parte de las leyes internacionales (Murphy, 2005, p. 145). En otras palabras, Woodrow Wilson trató de legitimar internacionalmente la hegemonía de los EE. UU. sobre

sus vecinos al sur del río Bravo, al mismo tiempo que hablaba de respeto a la soberanía de los Estados internacionales.

La doctrina Monroe fue una política exterior que inició el expresidente estadounidense James Monroe (del 4 de marzo de 1817 al 4 de marzo de 1825). En esencia, esa doctrina mantiene que las excolonias europeas en la América cobriza no podrán ser recolonizadas por sus excolonizadores y que esa garantía solo la dan los EE. UU. Pero, al mismo tiempo, los EE. UU. se autoagencian la América al sur del Río Bravo, como su propio patio trasero. Por lo tanto, lo que internamente suceda en cada uno de esos países es competencia de los EE. UU. (Calvert, 1994, pp. 14-15; Armstrong, Farrel and Lambert, 2007, p. 58). Los magos profesionales recurren a sus artes manuales ilusorias, mientras que los políticos profesionales recurren a la magia de su retórica demagógica. Por medios diferentes, ambos logran ocultar la realidad, al menos ante quienes son perezosos de pensamiento.

Las siguientes evidencias demuestran que Carter nunca fue un presidente precursor de la promoción de la soberanía internacional y de los derechos humanos. Por ejemplo, el Congreso de los EE. UU. ya había legislado en ese aspecto. La sección 32 del Acta de Asistencia Extranjera de 1973 de los EE. UU. (USA Foreign Assistance Act of 1973) explícitamente prohíbe asistencia económica o militar a Gobiernos extranjeros que flagrantemente violen los derechos humanos. También, la sección 502(B) de 1974 del Acta de Asistencia Extranjera, reforzada durante la administración de Gerald Ford (presidente de los EE. UU. del 9 de agosto de 1974 al 20 de enero de 1977) y luego llamada Acta de Control Sobre Exportación de Armas y Asistencia de Seguridad Internacional de 1976, explícitamente prohíbe asistencia estadounidense a países considerados como violadores de los derechos humanos (Bloomfield, 1982, p. 4).

Por el contrario, la Directiva Presidencial número 30 emitida por Jimmy Carter violó

flagrantemente esas actas al autorizar ayuda militar a países violadores de los derechos humanos durante su administración. El Salvador es solo uno de esos casos. Carter se autoagenció poderes especiales para continuar la ayuda militar al régimen represivo de El Salvador. El haber invocado los derechos humanos como bandera político-electoral no fue una innovación de Carter. El deterioro político y moral de los EE. UU., a partir de su humillante derrota en Vietnam, ya exigía un cambio, al menos retórico, en la política guerrillera y expansionista de los EE.UU. (Hartman, 2001, p. 404).

Cyrus R. Vance, secretario de Estado durante la administración de Jimmy Carter, reconoció que el Congreso de los EE. UU., antes de que Carter fuera elegido presidente, ya había legislado sobre la negación de ayuda estadounidense a países violadores de los derechos humanos. El Congreso de su país ya había tomado la iniciativa sobre los derechos humanos, supuestamente universales (Vance, 1983, pp. 313-317). Lo que Carter hizo fue, simplemente, manipular la ayuda estadounidense y usarla como una herramienta de su política exterior sobre derechos humanos. A los Gobiernos violadores de los derechos humanos que durante su período presidencial representaban un pilar vital para los intereses estratégicos de los EE.UU. no les negó ayuda militar.

La ayuda se la negó a los regímenes violadores de los derechos humanos que, en su óptica, no contribuían a la protección de los intereses geopolíticos de los EE. UU. (Ledem and Lewis, 1981, pp. 67-70). Jimmy Carter no tenía experiencia en política exterior, pero sus decisiones bastaban. Esa situación le permitía decidir que el color blanco era negro y que el color negro era blanco. Sus decisiones, como en cualquier ambiente militar, no se discutían, sino que se cumplían (Strong, 2000, pp. 260-262) y seleccionaban a qué Gobierno violador de los derechos humanos había que penalizar y a quién no (Herring, 2008, pp. 845-848). La política de derechos humanos

Implementada por Carter fue desde el principio inconsistente con su práctica, porque siempre aplicó un doble estándar de lo que su misma administración consideró "derechos humanos" (Light, 2001, pp. 79 y 96). El denunciar a unos Estados internacionales como violadores de los derechos humanos, pero ignorar deliberadamente a otros por la misma razón, fue parte de la política exterior de Jimmy Carter (Kowert, 1998, p. 104). Esas discrepancias de Carter nunca fueron errores involuntarios en su percepción de la realidad. Al contrario, esas contradicciones fueron intencionales y parte esencial de su ajedrez político a nivel mundial.

Jimmy Carter se presentó como candidato presidencial en un momento en el que las condiciones domésticas e internacionales le favorecían, y eran atizadas por su retórica supuestamente humanitaria. Pudo haber sido alguien más, pero las velas políticas en ese momento guiaban los barcos políticos en la dirección en que los políticos convencionales en los EE. UU. nunca se habían imaginado. Ahora, uno de ellos mismos hablaba de "derechos humanos universales" como que si los candidatos presidenciales de los EE.UU. hubieran descubierto o determinado que el resto de la humanidad también tenía derechos humanos. Carter, en su campaña electoral, fue oportunista y liberal en su retórica, pero realista una vez que fue elegido. Ahora, empecemos por analizar cómo Carter actuó ya en su carácter de presidente electo del país más poderoso del mundo.

¿Qué demuestran los documentos desclasificados sobre Carter?

El primer día de su período presidencial, Carter creó el Comité de Coordinación Especial (SCC, por sus siglas en inglés). Ese comité fue facultado para llevar a cabo "actividades encubiertas" en países soberanos (Presidential Directive/NSC-2). Las Directivas Presidenciales (Presidential Directives) son documentos altamente secretos emitidos por el presidente de turno en los EE. UU. El artículo

número dos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula que sus miembros tienen que respetar la soberanía de sus homólogos (ver el sitio oficial de la ONU). Pero, para Carter, la Carta de la ONU no tenía efecto vinculante en cuanto a respetar la soberanía de otros países. Quiérase o no, Carter estaba en lo legalmente correcto, aunque no necesariamente coincidiera con su previa retórica electoral. El que no es demagogo no es buen político y erosiona sus posibilidades electorales.

El problema fundamental de la mayoría de documentos emitidos por la ONU es que carecen deliberadamente de poder vinculante. Es decir, que no son leyes internacionales que respetar, con mecanismos de cumplimiento y verificación, sino que son simples llamados a sus Estados miembros a que se respeten mutuamente. Pero la realidad de las relaciones internacionales nunca se ha basado en llamamientos a la buena voluntad de los Estados internacionales. Al contrario, la realidad de las relaciones internacionales siempre se ha basado en el ejercicio del poder de cada Estado internacional sobre los Estados actores que menos poder tienen. El poder en sí no tiene significado si no se ejerce. Los EE. UU. siempre ejercitan su poder.

Los autoagenciados miembros permanentes del mal llamado Consejo de Seguridad de la ONU sí ejercitan su poder; los miembros de la Asamblea General no. Los miembros permanentes de Consejo de Seguridad son los que más inseguridad mundial generan. Ellos son los mayores mercaderes de la muerte en el mundo, porque son los que más armas de guerra producen y venden. Ellos se encargan, en nombre de la paz mundial, de crear guerras donde hay paz. La paz no produce dividendos, la guerra sí. La lógica de ellos es que, para que haya paz, primero tiene que haber guerra. Como si eso no fuera suficiente afrenta a las expectativas internacionales de respeto mutuo, en la ONU, la Asamblea General (compuesta por todos sus Estados internacionales miembros) vota o emite

resoluciones, pero es el grupúsculo de cinco miembros enquistados permanentemente en el supuesto Consejo de Seguridad el que verdaderamente decide el destino del mundo. En otras palabras, la Asamblea General vota, pero quien decide es el Consejo de Seguridad. No es exagerado argumentar que la ONU, en la práctica, es un tentáculo de las relaciones internacionales de los países más poderosos. Con la inmensa fortuna que se emplea para mantener el inefectivo engranaje humano de la ONU, se podría alimentar a los más pobres del mundo entero.

A pesar de que, en su retórica pública, Carter se presentó como un héroe defensor de los derechos humanos, su agenda oculta contradujo la percepción que las masas pudieran haber tenido en ese momento sobre su mesianismo humanitario. Por ejemplo, un par de meses después de que se convirtió en el inquilino oficial de la Casa Blanca, autorizó a su personal a negociar una solución diplomática con Cuba, pero con la condición de que los cubanos aceptaran compensar financieramente a los ciudadanos estadounidenses afectados por las expropiaciones de la revolución, y también de que los cubanos redujeran sus relaciones diplomáticas con los soviéticos (Presidential Directive/NSC-6, The White House, Washington, March 15, 1977). Una vez más, Carter ignoró que cada país es soberano en sus decisiones internas y relaciones internacionales. Su supuesta retórica de derechos humanos ignoró por completo el daño que el bloqueo económico de su país causó al pueblo cubano. Los cubanos, en la visión de Carter, no tenían derechos humanos.

Carter siempre tuvo una agenda pública y una secreta. En su Directiva Presidencial número 30, negó ayuda militar a Gobiernos que violaran los derechos humanos; pero, al mismo tiempo, autorizó ayuda militar a Gobiernos violadores de derechos humanos si esa ayuda serviría para garantizar los intereses estratégicos de los EE. UU. en la región del objetivo (Presidential Directive/NSC-30). En otras palabras, el verdadero objetivo de

Carter no era la protección y promoción de los derechos humanos, sino invocar los derechos humanos como una herramienta proselitista de su política exterior. Explicado de otra forma: los derechos humanos violados por Gobiernos títeres de los EE. UU. no tenían relevancia, excepto los derechos humanos violados por Gobiernos que rehusaban someterse a los dictados de Washington.

En su Directiva Presidencial número 18, Carter autorizó que se expandiera el poderío militar de su país en cualquier cuadrante donde, en su opinión, los soviéticos intentaran expandirse (Presidential Directive/NSC-18). El humilde cristiano e hijo de humildes cultivadores de maní, Jimmy Carter, se había quitado su piel de cordero, para enseñar su verdadera piel de lobo. Una cosa es actuar diferente cuando se quiere ser electo y otra actuar cuando ya se ha sido electo. Carter demostró ser bastante experto en el arte de la demagogia. Los hechos demuestran que su política exterior de derechos humanos aplicó un doble estándar. Es decir, en su óptica, los derechos humanos en los países títeres de Washington no tenían el mismo valor que los derechos humanos en los países que rehusaban aceptar los dictados de la Casa Blanca.

Derechos humanos: una política exterior de doble estándar

Durante su administración, Carter mantuvo no solo relaciones de cordialidad con dictaduras militares consideradas particularmente importantes para los intereses estratégicos de los EE UU, sino que también les dio su apoyo, mientras retóricamente se trató de distanciar de otras. Por ejemplo, después del asesinato de Patricio Lumumba, en 1961, líder del recién emancipado Congo Belga en África, los EE. UU. ayudaron a gestar una victoriosa contrarrevolución liderada por Mobuto Sese Seko. Por su parte, Jimmy Carter se encargó de proveer "ayuda no letal" a dicho dictador y permitió que Marruecos enviara miles de sus tropas entrenadas previamente por los EE. UU., para que lo mantuvieran a sangre

y fuego. Mobuto Sese Seko hasta le cambió nombre al país y lo rebautizó como Zaire. De esa forma, las personas "no pensantes" no culparían a los EE. UU. por las atrocidades cometidas, por Mobuto, aunque con esas atrocidades se garantizaban los intereses estratégicos de los EE. UU. en Zaire.

África permaneció en la agenda geopolítica de Carter. En 1978, el régimen de *apartheid* (segregación racial aprobada por el Estado) de África del Sur, controlado en todo aspecto por los europeos blancos, ordenó el bombardeo de un campo de refugiados de Namibia en Angola. Se estima que 600 de esos refugiados fueron masacrados en ese bombardeo. Todas las víctimas fueron personas negras. Por su parte, Jimmy Carter se encargó de garantizar que el mal llamado Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (¿o desunidas?) no le impusiera ningún tipo de sanciones al Gobierno de África del Sur. Su argumento principal fue que las tropas de ese país ya habían salido de Angola y que no volverían a masacrar a más negros, como que si la vida de esos negros no tuviera la misma validez que la de cualquier otro ser humano, independientemente de su color.

Guatemala no quedó exenta de la hipocresía de Carter. Su administración criticó públicamente las violaciones de los derechos humanos a manos del régimen militar guatemalteco y hasta les hizo un embargo "parcial" de aprovisionamiento de armas. Pero, al mismo tiempo, Jimmy Carter permitió que Israel (el gendarme yanqui en el Medio Oriente) continuara sufriendo las armas que la "democracia" estadounidense le había negado a Guatemala. Y además, pretendió ignorar el hecho de que las dictaduras militares de Chile y Argentina continuaron con el entrenamiento de tropas guatemaltecas, porque su administración rehusó continuar entrenándolas. Esa maniobra es insultante para la inteligencia humana, porque en este caso lo que cuenta no es quién entrena militarmente, sino que quienes se autonombaban héroes de los

derechos humanos hayan permitido que sus subordinados cometieran el crimen material.

Los tentáculos de la política exterior de Jimmy Carter también causaron estragos en Indochina. Para ilustrar, durante su administración, la dictadura militar del general Suharto en Indonesia cometió genocidio contra el pueblo de Timor del Este. Pero Jimmy Carter nunca arremetió contra dicho general, y esto a pesar de que el Gobierno de Australia le pidió explicaciones sobre su apoyo a esa dictadura. Carter nunca respondió a ese pedido. En 1967, con apoyo de la CIA, el Gobierno electo popularmente del general Sukarno en Indonesia fue derrocado por el General Suharto. La razón de peso que la CIA y Suharto ofrecieron fue que el Gobierno del general Sukarno se había inclinado demasiado hacia Mao Tse Dong, de China (nótese que solo hay una China). Taiwán solo es una provincia renegada, aunque se presente como China democrática e independiente. De acuerdo a la Casa Blanca, los chinos son comunistas y eso no es saludable para ninguna democracia que sea aceptada por los EE. UU. Tiempo después, el general Suharto invadió Timor del Este, y comenzó la carnicería de los timorenses a manos de la dictadura militar de Indonesia.

En el Medio Oriente, Afganistán se volvió la pesadilla de Jimmy Carter. En 1978, un Gobierno comunista aparentemente prosoviético había tomado el poder. A partir de ese momento, las mujeres empezaron a conocer que ellas tenían tantos derechos como los hombres. Se incrementó el nivel de alfabetización, que era paupérrimo, y los olvidados del mundo empezaron a recibir no solo asistencia médica, sino que además gratuita. Para Jimmy Carter, eso no era más que la teoría del dominó (inferir que, si un Estado sometido se sale del control del Estado dominante, otros Estados sometidos seguirán el mismo ejemplo y caerán, como en un juego de dominó) en la práctica. Él consideró que, si Afganistán había logrado eso, otros Estados vecinos donde el

Islam es la religión preponderante seguirían el mismo ejemplo.

Eso, en la opinión de Jimmy Carter, resultaría en una pérdida del control geopolítico de los EE. UU. en esos Estados. Por extraño que le pueda parecer a quienes leen, la versión más radical del Islam impide que las mujeres tengan derechos al igual que los hombres. Por ejemplo, en Arabia Saudita —el mayor violador mundial de los derechos humanos, pero también el mayor comprador de armamento militar estadounidense—, se aprobó, hasta en diciembre de 2015, que las mujeres podían ejercer el voto, pero no conducir vehículos. Gracias a los vínculos “comerciales” entre la dictadura Saudí y el Pentágono, Arabia Saudita nunca aparece en los medios de información como el campeón de las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Ahí decapitan en público a algún supuesto ateo o a alguna supuesta infiel, mientras a todos los hombres se les permite tener, legalmente, cuatro esposas al mismo tiempo. Carter, para prevenir lo que consideró la progresión de la teoría del dominó en esa región, optó por proveer entrenamiento y logística militar a la oposición dentro de Afganistán.

Su objetivo era que los guerreros muyahidines derrocaran al ahora Gobierno revolucionario de Afganistán. Las mujeres afganas empezaban a saber que también tenían derechos humanos como las demás mujeres en otros países musulmanes. Pero Carter no estaba preocupado por ese descubrimiento, sino por las repercusiones que eso podría tener en una región usualmente controlada por los EE. UU. Ante esa embestida de Carter, los soviéticos decidieron invadir Afganistán para garantizar que Carter no derrocaría al nuevo Gobierno. Tiempo después, los soviéticos tuvieron que salir de Afganistán, al menos, políticamente derrotados. Luego, los guerreros muyahidines tomaron el poder y se convirtieron en los famosos “talibanes”, quienes mantuvieron excelentes relaciones con Al-Qaeda, dirigida por el supuesto difunto Bin Laden. Lo llamativo en este caso es el hecho de que los guerreros muyahidines, apoyados por Jimmy Carter, que

asesinaban soviéticos y masacraban afganos civiles, no eran considerados ni terroristas ni mucho menos violadores de los derechos humanos.

A pesar de lo publicitado sobre su respeto y promoción de los derechos humanos, las acciones de Jimmy Carter fueron a menudo macroscópicamente discrepantes con su retórica. Por ejemplo, el 23 de enero de 1980, en su mensaje anual al Congreso de su país, Carter declaró que el Golfo Pérsico había sido y seguiría siendo vital para los intereses geopolíticos de los EE. UU. Por lo tanto, estaba dispuesto a lo que fuera necesario para mantener control sobre esa región (Adam, 1980, p. 725). El primero de marzo de 1980, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución condenando al Estado de Israel por su continuado expansionismo sobre Palestina. Pero dos días después, Jimmy Carter lamentó públicamente el haber apoyado esa resolución (Adam, 1980, p. 726). En otras palabras, Jimmy Carter les negó derechos humanos a los palestinos y aprobó el expansionismo israelí sobre Palestina.

Con su fingido cristianismo, Carter se había presentado a sí mismo como una especie de santo patrón de los derechos humanos. Pero su verdadera agenda, guiada por el realismo de las relaciones internacionales, casi siempre lo hacía caer públicamente en contradicciones. Por ejemplo, en un discurso televisado el 18 de septiembre de 1980, Carter manifestó abiertamente que, si para defender Europa Occidental y los intereses geopolíticos de los EE. UU. tuviera que recurrir al uso de bombas atómicas, no lo dudaría ni un solo segundo. Aún más, el falso cristianismo de Carter lo llevó a declarar públicamente que por ningún motivo le pediría disculpas al pueblo de Irán (recientemente emancipado de la dictadura del Shah Mohamed Reza Pahlevi), por haber ayudado militarmente a ese dictador (Pakistan Institute of International Affairs, 1980, p. 128). El Shah Mohamed Reza Pahlevi fue responsable de miles de asesinatos políticos durante su dictadura militar en Irán. Esto demuestra el doble estándar de la política

de derechos humanos invocada por Jimmy Carter.

El día 26 de octubre de 1979, Jimmy Carter permitió que el exdictador iraní, Shah Mohamed Reza Pahleví entrara a los EE. UU., supuestamente, para someterse a un tratamiento médico. Al mismo tiempo, días antes Carter había autorizado el refuerzo de la presencia militar estadounidense en el Caribe (Pakistan Institute of International Affairs, 1979, pp. 195-197). La política exterior de Jimmy Carter jamás se diferenció de la de sus antecesores en cuanto al aspecto expansionista. La única diferencia era que Carter hablaba públicamente de respetar los derechos humanos, mientras que sus antecesores habían omitido esa herramienta de política exterior en sus respectivas retóricas. El día 8 de agosto de 1980, Carter ordenó que casi dos mil marines estadounidenses entraran al océano Índico, para dar no solo un ejemplo de fuerza militar, sino de lo que la Administración de Carter estaba dispuesta a hacer si algún David se atrevía a desafiar al Goliat del norte en esa región (Pakistan Institute of International Affairs, 1980, p. 163).

La política exterior de Carter hacia El Salvador

Carter ignoró deliberadamente las verdaderas causas de la efervescencia social en El Salvador. Al contrario, como un presidente más de los EE. UU., simplemente continuó argumentando que la problemática salvadoreña tenía orígenes exógenos, y no endógenos. Es decir, la crisis en El Salvador había sido generada por los cubanos, los sandinistas y sus amos soviéticos, y no por la miseria, explotación y represión estatal a la que el pueblo salvadoreño había sido sometido durante décadas de Gobiernos militares. Por ejemplo, en su Directiva Presidencial n.º 52, Carter insiste en que los problemas salvadoreños emanan de Cuba. La solución que él propone en ese documento ejecutivo no es la promoción de la democracia en El Salvador; sino que, por cualquier medio hay que boicotear a

Cuba, para que no se erija como líder de los llamados países del tercer mundo, particularmente en Centroamérica.

En esa misma directiva presidencial, Carter instruye a sus subalternos a que hagan todo lo posible para que a Cuba no se le dé un asiento en el grupo de observadores del Consejo de Seguridad de la ONU. La obsesión de Carter contra Cuba llama aún más la atención, por el hecho de autorizar a que, si no pueden invadir militarmente Cuba, "hay que hacerlo culturalmente". Para tal efecto, Carter ordena que infiltren películas de Hollywood en esa isla (Presidential Directive/NSC-52). ¿Cuántas personas, gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales creyeron en la honestidad de la retórica de los derechos humanos de Jimmy Carter durante su administración? ¿Cuántos creyeron en ese inesperado pastor de los derechos humanos universales, nacido en el país que más oscurece los derechos humanos de los países subyugados por la Casa Blanca?

Murat W. Williams, quien fue Embajador de los EE. UU. en El Salvador de 1961 a 1964, durante la administración de John F. Kennedy dejó en claro antes de morir, que la situación en El Salvador no era causada por agentes extranjeros, sino por la extrema opulencia de unos pocos y la extrema pobreza de muchos. Ese diplomático de alto rango, también reconoció la culpabilidad de los EE. UU., por patrocinar la imposición de gobiernos sumisos a los dictados de Washington; en vez de respetar la voluntad popular expresada por la vía electoral (*Americas in Transition*, documental producido por Obie Benz en 1982). Murat W. Williams, también jugó un papel importante en la fallida Alianza para el Progreso. Esa política exterior trató de contrarrestar lo que, su exjefe, John F. Kennedy, percibió como un potencial efecto dominó, después del triunfo de la revolución cubana. Si hoy fue Cuba, mañana podían ser sus vecinos isleños o continentales. Eso, indudablemente, implicaría perder un peón más en la hegemonía de los EE. UU. sobre América Latina.

Kennedy discernió entre realidad e ideología anticomunista. En un desesperado pragmatismo político, reconoció que las condiciones de pobreza en la América cobriza no se guiaban por ideologías, sino que por estómagos vacíos. El aceptó que los seres humanos piensan “mejor con el estómago lleno”. De ahí que empezó por ofrecer alimentos (por ejemplo harinas y aceites comestibles, leche en polvo para las escuelas primarias, etc.) a los países pobres, pero también ahí empezó el fallo de su política exterior. Su objetivo fundamental no era el de ayudar a los pobres a volverse autosuficientes o a desarrollarse integralmente, sino que el de pelear necesidades fisiológicas básicas, que en veinticuatro horas destruirían esa política exterior, al completar la digestión. Kennedy no quiso enseñarles a pescar. Kennedy, prefirió regalarles algunos peces; y peces sin mayor valor, para la economía de su país. En una de sus canciones, el grupo musical venezolano *Guaragua* argumenta que “nos dan harina, sabiéndose que es afrecho”. El afrecho es un producto de desecho durante la producción de la harina, pero que se puede usar para alimentar el ganado vacuno, porcino y lanar.

Jimmy Carter ignoró estas realidades, a pesar de que su propio embajador en El Salvador, Robert White, le explicó claramente que la situación en ese país tenía causas netamente domésticas y no externas. De acuerdo a ese embajador, y en consonancia con su excolega Murat W. Williams, las causas primarias de las hostilidades domésticas radicaban en que pocos tenían mucho y muchos tenían poco. Por lo tanto, los argumentos de que el movimiento emancipatorio fuera generado por el expansionismo del comunismo internacional no tenían cabida en el contexto de El Salvador. El entonces embajador White también le manifestó, a Jimmy Carter, que la represión estatal y su respectiva impunidad servían solo para agregarle más combustible al fuego revolucionario doméstico. White en una ocasión le hizo saber, a Carter, que el mayor Roberto D’Abuisson no solo era el líder de los escuadrones de la muerte, sino que también

era “un asesino patológico” [“a *pathological killer*”] (Constable, 2015, January 15, *The Washington Post*).

Lo irónico de la posición de ese embajador es que, como diplomático de alto rango, él tenía que mantener una retórica pública de apoyo a la política exterior de los EE.UU. hacia El Salvador. Pero eso no le impedía reportar internamente a su jefe lo que en realidad sucedía en el país, donde representaba los intereses de Washington. Los embajadores de cada país son los únicos espías que legalmente no son categorizados como espías, aunque su función principal sea la de informar, al Gobierno del país que representan, lo que sucede en el país anfitrión. Pero, ellos también pueden “sugerir” cursos de acción en cuanto a política exterior, aunque las decisiones son siempre tomadas por la minoría ejecutiva, en este caso, en la Casa Blanca. Por lo tanto, Jimmy Carter, a pesar de la información contradictoria que recibía en esa casa de dudosa blancura, sabía con conocimiento de causa las decisiones que tomaba.

Por ejemplo, durante su administración, los ataques contra el sector progresista de la Iglesia católica no eran asunto de preguntarse si sucederían, sino cuándo y cómo empezarían. Carter lo sabía a perfección. En un reporte secreto elaborado por la CIA (Central Intelligence Agency), se argumenta que la Iglesia católica ha sido una tradicional aliada para mantener el *statu quo* al sur del río Bravo, pero que hay sectores que se han radicalizado y que, en vez de promover el orden establecido, promueven un cambio revolucionario. En ese reporte, la CIA acusa al papa Juan XXIII y a su sucesor, Paulo VI, de haber instigado ese cambio de posición en el conservadurismo tradicional de la Iglesia católica (CIA, Directorate of Intelligence, Intelligence Report: *The Committed Church and Change in Latin America*, Reference Title: ESAU XLIII/69).

El señor Jimmy Carter tiene bastante que explicarle al pueblo salvadoreño. La mayoría

de asesinatos de clérigos en El Salvador ocurrió durante su administración presidencial y jamás hubo ninguna investigación seria que condujera a los verdaderos autores de dichos magnicidios. Dentro de esas víctimas se incluye a los sacerdotes Rutilo Grande, Alfonso Navarro, Ernesto Barrera Moto, Octavio Ortiz, Rafael Palacios, Alirio Napoleón Macas, Manuel Reyes, Ernesto Ábrego y Marcial Serrano; a monseñor Óscar Arnulfo Romero, al Fraile Cosme Spesotto y a las religiosas Maryknoll Jean Donovan, Maura Clarke, Ita Ford y Dorothy Kazel (Romero, 2014, p. 313). Las religiosas estadounidenses fueron asesinadas en El Salvador, en diciembre de 1980; antes de la celebración de Navidad, mientras Jimmy Carter continuaba su período presidencial, allá en la Casa Blanca, desde donde, en la práctica, se dirigía el destino del pueblo salvadoreño.

El encarcelamiento posterior de algunos guardias nacionales de El Salvador, acusados de haber sido los autores materiales del asesinato de las religiosas estadounidenses, no tiene que interpretarse como una investigación seria. Esas capturas ni sucedieron durante la administración de Carter ni llegó a los autores intelectuales. Creer que esos guardias nacionales fueron los únicos responsables de tal magnicidio sería equivalente a creer que Santa Claus es responsable por los juguetes que los niños privilegiados reciben en Navidad.

Monseñor Óscar Arnulfo Romero escribió una carta a Jimmy Carter suplicándole que no enviara más ayuda militar al régimen salvadoreño, porque eso solo serviría para aumentar la ya sangrienta represión estatal contra el pueblo (documento desclasificado n.º 4, fechado el 19 de febrero de 1980, The National Security Archive). El primero de marzo de ese mismo año, la administración de Jimmy Carter le respondió, a monseñor Romero, que no tenía por qué preocuparse, dado que la ayuda que envían para la Junta de Gobierno no es letal sino que para “profesionalizar” a las Fuerzas Armadas, para que sigan manteniendo el orden con el más

mínimo uso de fuerza letal (documento desclasificado n.º 5, The National Security Archive).

Pero llama bastante la atención el hecho de que la administración de Jimmy Carter, a espaldas de monseñor Romero, había enviado una carta secreta al papa Juan Paulo II. En esa carta, Jimmy Carter le pide al papa que discipline a monseñor Romero y a sus supuestos asesores jesuitas. De acuerdo a esa carta, monseñor Romero y sus instigadores jesuitas están seguros de que el triunfo de la revolución en El Salvador es inminente. De ahí que ambos se hayan inclinado en favor de un cambio violento al estilo Nicaragua (documento desclasificado n.º 3, The National Security Archives). Cuando monseñor Romero fue asesinado, Jimmy Carter no escatimó esfuerzos en condenar públicamente ese magnicidio y hasta argumentó que la voz de monseñor Romero jamás podría ser callada por los que se oponen a la justicia social (documento desclasificado n.º 9, The National Security Archives). Si el escritor uruguayo, Eduardo Galeano, estuviera vivo, con toda seguridad habría afirmado que Jimmy Carter estaba acostumbrado a mentir con honesta sinceridad.

Como si la demagogia de Carter no hubiera sido suficiente en ese momento, después de haber terminado su período presidencial, trató de distanciarse de sus propios crímenes en un artículo que él llamó “The Greatest Human Rights Crime” (“El más grande crimen de los derechos humanos”). En ese artículo, Carter reconoce que su país invirtió billones de dólares, apoyando a líderes militares en El Salvador, que a su vez apoyaban a los infames escuadrones de la muerte. También reconoce que esos mismos militares salvadoreños, con el apoyo de su país, fueron responsables por el asesinato de los sacerdotes jesuitas y las monjas Maryknoll. En su crítica a su sucesor (Ronald Reagan), argumenta que, a pesar de esas realidades, los EE. UU. no quisieron ver ni escuchar, sino que prefirieron continuar con la ayuda militar al régimen genocida de El Salvador (Carter

and Riedman, 1990, p. 17). Lo insultante a la inteligencia humana es el hecho de que Carter actuó exactamente de la misma forma. Al menos Reagan fue abiertamente militarista, nunca lo negó, mientras que Carter se escudó en la demagogia retórica invocando el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, Jimmy Carter fue igual de militarista que Ronald Reagan. En los EE. UU. cambian los presidentes por la vía electoral periódica y pacífica, pero lo que no cambia es la continuidad hegemónica de su política exterior. Eso, sin importar el partido político en el poder.

Mientras los asesinatos de clérigos continuaban en El Salvador, también personas seglares eran victimizadas, aunque estas víctimas recibieran menos atención en la prensa nacional e internacional. Pero llama aún más la atención el hecho de que, durante ese mismo período, la política exterior de derechos humanos de Jimmy Carter continuaba siendo publicitada con bombo y platillo. Su subordinado en El Salvador era el general Carlos Humberto Romero. Carter sabía que Romero no había sido elegido popularmente, sino que impuesto militarmente como presidente de El Salvador. En los medios de comunicación (¿o medios de incomunicación?), los asesinatos de miembros de la Iglesia católica siempre recibieron más atención que los asesinatos de ciudadanos comunes. Para ilustrar, acá se mencionarán solo algunos casos de esos ciudadanos comunes y corrientes que no recibieron la misma atención periodística durante la administración de Jimmy Carter, el entonces mesías internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, durante una marcha pacífica que ocurrió el 22 de enero de 1980 en San Salvador, y que fue disuelta con violencia estatal, dos estudiantes que habían tomado parte en dicha manifestación fueron capturados por la mal llamada “benemérita” Guardia Nacional, cuando trataban de llegar a la Universidad Nacional a refugiarse.

Esos estudiantes fueron, Francisco Arnulfo Ventura (amigo desde la infancia de quien escribe este artículo) y José Humberto

Mejía, ambos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurisprudencia de la Universidad Nacional de El Salvador (UES). Ellos fueron capturados, por guardias nacionales en presencia de los marines que también cuidaban su propia embajada, cuando ambos estudiantes pasaban por la entrada del parqueo de la embajada de los EE. UU. en San Salvador. Luego, dichos estudiantes fueron entregados a hombres vestidos de civil, quienes los introdujeron al baúl del vehículo que ellos mismos conducían. Hasta el día de hoy, no se sabe el paradero de los dos estudiantes. La Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) exigió un *habeas corpus*, sin ningún resultado. El entonces fiscal general, Mario Zamora (quien años después sería asesinado por los mismos agentes del Estado, con la modalidad de escuadrones de la muerte), acudió a la Corte Segunda de lo Criminal y pidió información tanto de la Embajada de los EE. UU. como de la Guardia Nacional sobre el paradero de ambos estudiantes. Ni la embajada del Goliat del norte ni la Dirección de la “Benemérita” Guardia Nacional respondieron, aunque ellos sabían todo (Lamperti, 2006, p. 182; Tombs, 2001, p. 209; Scovazzi and Citroni, 2007, pp. 82-83). Carter, el entonces campeón mundial de los derechos humanos, había autorizado al personal de su embajada a que guardara silencio sobre ese hecho.

De acuerdo al general Carlos Eugenio Vides Casanova, exdirector de la temible Guardia Nacional de El Salvador (posiblemente, el cuerpo policial más criminal en la historia de El Salvador), consecutivos Gobiernos estadounidenses sabían cómo ellos operaban en el combate contra el supuesto comunismo, subversión y terrorismo. Por lo tanto, Jimmy Carter sabía a la perfección sobre lo que el general Vides Casanova argumentó en su cobarde defensa ante un tribunal migratorio de Florida. El general Vides Casanova fue deportado, finalmente, a El Salvador (The USA Department of Justice, 2012, p. 3). Aún después de dos Gobiernos supuestamente de izquierda, los asesinos del

pueblo salvadoreño continúan en libertad y no hay esperanza de que rindan cuentas ante el sistema judicial. La sed de justicia del pueblo salvadoreño ha sido traicionada por quienes en un tiempo se autoagenciaron la representatividad de ese pueblo al que argumentaron defender. Eso confirma que una cosa es estar en la oposición y otra muy diferente es ya estar en el poder. De revolucionarios, en la práctica solo les ha quedado el "mote".

El 24 de noviembre de 1977, el general Carlos Humberto Romero, presidente impuesto, por la vía del fraude electoral, promulgó la Ley para la Defensa y Garantía del Orden Público. Esa ley, prácticamente prohibía toda forma de expresión popular, activa y pasiva, y legalizaba el encarcelamiento de quienes se atrevieran a hacer lo contrario. Toda forma de oposición a esa ley draconiana se volvía automáticamente (en la jerga militar imperante en ese tiempo) en sinónimo de subversión, terrorismo y comunismo. Esos conceptos habían sido oficialmente demonizados, sin explicar que los verdaderos subversivos eran quienes habían subvertido la voluntad popular por la vía del fraude electoral, golpes militares o simples "cuartelzos". La versión oficial, apoyada por una prensa doméstica lacaya (por lo general, representada por *El Diario de Hoy*, tampoco explicaba que quienes en verdad aterrorizaban al pueblo eran los militares y sus cuerpos policiales (también de naturaleza militar, pero con un disfraz de policía civil), y que comunismo (sin ideologizar el concepto) viene de vivir y compartir en comunidad. Es de extrema importancia que las nuevas generaciones conozcan la realidad, las tribulaciones que sus progenitores vivieron en esa época; y que no se pierda la memoria histórica. En ese tiempo, Satanás era menos peligroso que alguna persona que hubiera sido tildada de subversiva, terrorista o comunista por el régimen militar salvadoreño. Cualquiera de esos epítetos era la antesala del más allá, mientras que quienes eran dueños de la vida y la muerte se quedaban en el más acá.

El 17 de agosto de 1979, el general Romero había negado que hubiera prisioneros políticos en El Salvador. Pero, el 27 de noviembre de ese mismo año, monseñor Óscar Arnulfo Romero denunció públicamente que había una cárcel clandestina en el cuartel central de la Policía de Hacienda. Monseñor Romero nunca supo que también el coronel Alvarenga ("el hombre del machete", para sus subordinados), también tenía sus propias cárceles clandestinas en el cuartel de la Policía Nacional. El 20 de febrero de 1980, las instalaciones de la UCA y la Radio YSAX (del Arzobispado), fueron víctimas de bombas que intentaban callarlas. El 26 de junio de ese mismo año, la supuesta centrista y democrática Junta de Gobierno ordenó la invasión y ocupación militar de la UES. Mientras tanto, Carter continuaba su apoyo militar y político a lo que él llamaba un nuevo Gobierno, centrista, moderado y democrático.

Jimmy Carter sabía perfectamente lo que sucedía en El Salvador, pero no actuó con la severidad que su política de derechos humanos sugería públicamente. Carter actuó de tal manera que no quería confundir a sus subordinados en El Salvador. Por un lado, le pedía al Gobierno salvadoreño reducir las violaciones a los derechos humanos; pero, por otro lado, no estaba dispuesto a abandonar a un régimen militar que garantizaba, a cualquier precio, la hegemonía estadounidense en un país de su autoagenciado "patio trasero". El general Romero también sabía esa posición, al extremo de que llegó a rehusar ayuda militar de Washington si le seguían exigiendo respeto a los derechos humanos. El general Romero también sabía jugar al ajedrez político, aunque, en dicho juego, no pasara de ser un peón más. Aún así, les hizo saber, a quienes verdaderamente decidían el destino de El Salvador desde Washington, que por muy "peón" que fuera en ese ajedrez político, les haría la vida no tan fácil. Esa insolencia le costó su reemplazo de hombre fuerte, por otros más fuertes en la supuesta Junta de militares centristas y reformistas que Carter impuso en El Salvador. No hay que olvidar que, en relaciones inter-

and Riedman, 1990, p. 17). Lo insultante a la inteligencia humana es el hecho de que Carter actuó exactamente de la misma forma. Al menos Reagan fue abiertamente militarista, nunca lo negó, mientras que Carter se escudó en la demagogia retórica invocando el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, Jimmy Carter fue igual de militarista que Ronald Reagan. En los EE. UU. cambian los presidentes por la vía electoral periódica y pacífica, pero lo que no cambia es la continuidad hegemónica de su política exterior. Eso, sin importar el partido político en el poder.

Mientras los asesinatos de clérigos continuaban en El Salvador, también personas seculares eran victimizadas, aunque estas víctimas recibieran menos atención en la prensa nacional e internacional. Pero llama aún más la atención el hecho de que, durante ese mismo período, la política exterior de derechos humanos de Jimmy Carter continuaba siendo publicitada con bombo y platillo. Su subordinado en El Salvador era el general Carlos Humberto Romero. Carter sabía que Romero no había sido elegido popularmente, sino que impuesto militarmente como presidente de El Salvador. En los medios de comunicación (¿o medios de incomunicación?), los asesinatos de miembros de la Iglesia católica siempre recibieron más atención que los asesinatos de ciudadanos comunes. Para ilustrar, acá se mencionarán solo algunos casos de esos ciudadanos comunes y corrientes que no recibieron la misma atención periodística durante la administración de Jimmy Carter, el entonces mesías internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, durante una marcha pacífica que ocurrió el 22 de enero de 1980 en San Salvador, y que fue disuelta con violencia estatal, dos estudiantes que habían tomado parte en dicha manifestación fueron capturados por la mal llamada "benemérita" Guardia Nacional, cuando trataban de llegar a la Universidad Nacional a refugiarse.

Esos estudiantes fueron, Francisco Arnulfo Ventura (amigo desde la infancia de quien escribe este artículo) y José Humberto

Mejía, ambos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurisprudencia de la Universidad Nacional de El Salvador (UES). Ellos fueron capturados, por guardias nacionales en presencia de los marines que también cuidaban su propia embajada, cuando ambos estudiantes pasaban por la entrada del parqueo de la embajada de los EE. UU. en San Salvador. Luego, dichos estudiantes fueron entregados a hombres vestidos de civil, quienes los introdujeron al baúl del vehículo que ellos mismos conducían. Hasta el día de hoy, no se sabe el paradero de los dos estudiantes. La Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) exigió un *habeas corpus*, sin ningún resultado. El entonces fiscal general, Mario Zamora (quien años después sería asesinado por los mismos agentes del Estado, con la modalidad de escuadrones de la muerte), acudió a la Corte Segunda de lo Criminal y pidió información tanto de la Embajada de los EE. UU. como de la Guardia Nacional sobre el paradero de ambos estudiantes. Ni la embajada del Goliath del norte ni la Dirección de la "Benemérita" Guardia Nacional respondieron, aunque ellos sabían todo (Lamperti, 2006, p. 182; Tombs, 2001, p. 209; Scovazzi and Citroni, 2007, pp. 82-83). Carter, el entonces campeón mundial de los derechos humanos, había autorizado al personal de su embajada a que guardara silencio sobre ese hecho.

De acuerdo al general Carlos Eugenio Vides Casanova, exdirector de la temible Guardia Nacional de El Salvador (posiblemente, el cuerpo policial más criminal en la historia de El Salvador), consecutivos Gobiernos estadounidenses sabían cómo ellos operaban en el combate contra el supuesto comunismo, subversión y terrorismo. Por lo tanto, Jimmy Carter sabía a la perfección sobre lo que el general Vides Casanova argumentó en su cobarde defensa ante un tribunal migratorio de Florida. El general Vides Casanova fue deportado, finalmente, a El Salvador (The USA Department of Justice, 2012, p. 3). Aún después de dos Gobiernos supuestamente de izquierda, los asesinos del

pueblo salvadoreño continúan en libertad y no hay esperanza de que rindan cuentas ante el sistema judicial. La sed de justicia del pueblo salvadoreño ha sido traicionada por quienes en un tiempo se autoagenciaron la representatividad de ese pueblo al que argumentaron defender. Eso confirma que una cosa es estar en la oposición y otra muy diferente es ya estar en el poder. De revolucionarios, en la práctica solo les ha quedado el "mote".

El 24 de noviembre de 1977, el general Carlos Humberto Romero, presidente impuesto, por la vía del fraude electoral, promulgó la Ley para la Defensa y Garantía del Orden Público. Esa ley, prácticamente prohibía toda forma de expresión popular, activa y pasiva, y legalizaba el encarcelamiento de quienes se atrevieran a hacer lo contrario. Toda forma de oposición a esa ley draconiana se volvía automáticamente (en la jerga militar imperante en ese tiempo) en sinónimo de subversión, terrorismo y comunismo. Esos conceptos habían sido oficialmente demonizados, sin explicar que los verdaderos subversivos eran quienes habían subvertido la voluntad popular por la vía del fraude electoral, golpes militares o simples "cuartelzos". La versión oficial, apoyada por una prensa doméstica lacaya (por lo general, representada por *El Diario de Hoy*, tampoco explicaba que quienes en verdad aterrorizaban al pueblo eran los militares y sus cuerpos policiales (también de naturaleza militar, pero con un disfraz de policía civil), y que comunismo (sin ideologizar el concepto) viene de vivir y compartir en comunidad. Es de extrema importancia que las nuevas generaciones conozcan la realidad, las tribulaciones que sus progenitores vivieron en esa época; y que no se pierda la memoria histórica. En ese tiempo, Satanás era menos peligroso que alguna persona que hubiera sido tildada de subversiva, terrorista o comunista por el régimen militar salvadoreño. Cualquiera de esos epítetos era la antesala del más allá, mientras que quienes eran dueños de la vida y la muerte se quedaban en el más acá.

El 17 de agosto de 1979, el general Romero había negado que hubiera prisioneros políticos en El Salvador. Pero, el 27 de noviembre de ese mismo año, monseñor Óscar Arnulfo Romero denunció públicamente que había una cárcel clandestina en el cuartel central de la Policía de Hacienda. Monseñor Romero nunca supo que también el coronel Alvarenga ("el hombre del machete", para sus subordinados), también tenía sus propias cárceles clandestinas en el cuartel de la Policía Nacional. El 20 de febrero de 1980, las instalaciones de la UCA y la Radio YSAX (del Arzobispado), fueron víctimas de bombas que intentaban callarlas. El 26 de junio de ese mismo año, la supuesta centrista y democrática Junta de Gobierno ordenó la invasión y ocupación militar de la UES. Mientras tanto, Carter continuaba su apoyo militar y político a lo que él llamaba un nuevo Gobierno, centrista, moderado y democrático.

Jimmy Carter sabía perfectamente lo que sucedía en El Salvador, pero no actuó con la severidad que su política de derechos humanos sugería públicamente. Carter actuó de tal manera que no quería confundir a sus subordinados en El Salvador. Por un lado, le pedía al Gobierno salvadoreño reducir las violaciones a los derechos humanos; pero, por otro lado, no estaba dispuesto a abandonar a un régimen militar que garantizaba, a cualquier precio, la hegemonía estadounidense en un país de su autoagenciado "patio trasero". El general Romero también sabía esa posición, al extremo de que llegó a rehusar ayuda militar de Washington si le seguían exigiendo respeto a los derechos humanos. El general Romero también sabía jugar al ajedrez político, aunque, en dicho juego, no pasara de ser un peón más. Aún así, les hizo saber, a quienes verdaderamente decidían el destino de El Salvador desde Washington, que por muy "peón" que fuera en ese ajedrez político, les haría la vida no tan fácil. Esa insolencia le costó su reemplazo de hombre fuerte, por otros más fuertes en la supuesta Junta de militares centristas y reformistas que Carter impuso en El Salvador. No hay que olvidar que, en relaciones inter-

nacionales, no hay amigos que defender, sino intereses estratégicos que defender. El enemigo de hoy puede ser el aliado de mañana; y el aliado de hoy puede ser el enemigo de mañana. Carter era un experto en esos menesteres internacionales.

Algunas personas lectoras se preguntarán, entonces, por qué Carter aprobó el golpe de Estado contra el general Romero. La razón no era táctica sino estratégica. En 1979, en Nicaragua, Carter había tratado de negociar, con los sandinistas, la salida del dictador Somoza por la vía pacífica. Pero lo que Carter proponía no era un cambio de sistema en Nicaragua, sino un cambio de presidente. En otras palabras, un somocismo, sin Somoza. Obviamente, los sandinistas rechazaron esa propuesta y continuaron con su lucha guerrillera hasta derrocar a la dinastía de la familia Somoza, que había gobernado ese país por casi medio siglo. Carter, aunque se presentaba públicamente como un practicante del liberalismo [teoría de las relaciones internacionales que propugna el respeto a las leyes y las instituciones] (Barkin, 2010, p. 120; Schoenbaum, 2006, p. 44), en la práctica actuó como practicante del realismo [teoría de las relaciones internacionales que argumenta que, en la práctica, el respeto a las leyes es siempre secundario a los intereses estratégicos de cada Estado internacional] (Forsythe, 2006, 2nd ed., p.33 and 139; Williams, 2006, p. 253).

Menos de un mes después del derrocamiento de la dictadura somocista en Nicaragua, Carter envió a Cyrus Roberts Vance, su secretario de Estado, a que se reuniera con los "hombres fuertes" en cada país de Latinoamérica (exceptuando a Fidel Castro y Daniel Ortega). Carter había entendido que siempre hay una última gota, que es la que hace que el vaso se desborde. En esa ocasión, se empezó a gestar el golpe militar contra el general Romero de El Salvador. Por otro lado, aunque la administración de Carter argumentó que había sido un golpe sin derramamiento de sangre, las pocas evidencias existentes demuestran que al menos una treintena

de personas murieron durante ese golpe militar (Adam, 1979, pp. 731 y 772).

Cuando Jimmy Carter optó por ordenar el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero en El Salvador, no lo hizo pensando en el sufrido pueblo de ese país, sino en la teoría del dominó y en la Doctrina Monroe. De acuerdo a la teoría del dominó, aplicada a las relaciones internacionales y, en particular, desde la óptica de Washington, si un país bajo la hegemonía de la Casa Blanca logra emanciparse, los vecinos del emancipado seguirán los mismos pasos (Slater, 1987, pp. 106-108; Hitchins, 2001, p. 55). En otras palabras, si Nicaragua se había logrado liberar de la hegemonía estadounidense, los alzados en armas en El Salvador también podrían conquistar su segunda independencia. Eso explica la decisión de Jimmy Carter de haber seguido apoyando militarmente al régimen salvadoreño. En el caso de El Salvador, Carter ordenó el cambio de un dictador militar, pero para ser reemplazado, por un Gobierno "cosmética-mente" civil. Carter no quería otra Nicaragua en El Salvador (Mayall, 1986, p. 173). Su embajador en El Salvador, Robert White, venía de Paraguay, donde también había sido embajador del imperio que representaba. White le informó a Carter que también en Paraguay había eferescencia social, la cual, al igual que en El Salvador, también se debía al exceso de estómagos vacíos.

La doctrina Monroe, promulgada por James Monroe (presidente de los EE. UU. del 4 de marzo de 1817 al 4 de marzo de 1825), autoriza a la Casa Blanca a decidir el destino geopolítico y económico de las recientemente emancipadas colonias españolas en América latina. En otras palabras, esa doctrina confirma que la independencia de España, a nivel internacional, solo significó una transferencia de hegemonía. Es decir, de la Corona de España a la Casa Blanca (Crabb, Jr., 1982, p. 14). No pasó mucho tiempo para que los EE. UU. se erigieran a sí mismos en el nuevo y único polo de poder hemisférico. Por supuesto, El Salvador no fue inmune a la

dominación del nuevo gendarme. Los EE. UU. siempre avalaron en El Salvador a cualquier Gobierno que le garantizara a Washington esa hegemonía hemisférica. El hecho de que los Gobiernos salvadoreños hayan sido impuestos, por la vía del fraude electoral, golpes de Estado o cuartelazos siempre fue irrelevante ante los ojos de Washington. Lo que le importaba a la Casa Blanca era que cada nuevo Gobierno militar salvadoreño actuara como centurión del imperio dirigido desde Washington.

Por las razones antes expuestas, el autor de este artículo llama "imbiosis mutualista estratégica" (SME) a las relaciones entre los EE. UU. y cualquier régimen de turno en El Salvador (con más énfasis en el período de 1980 a principios de 1992, pero no exclusivamente). La ayuda militar de los EE. UU. a cualquier Gobierno de El Salvador siempre ha sido estratégica para la sobrevivencia del régimen; y la sobrevivencia de ese régimen salvadoreño siempre ha sido estratégica para la protección de los intereses geopolíticos de Washington en esa región. De eso se puede inferir que el general Romero fue depuesto porque ya no le servía a los intereses geopolíticos de Washington en El Salvador. El general Romero se había excedido en el uso de la fuerza bruta, lo cual la Casa Blanca consideraba necesario para mantener el *statu quo*. El aliado de ayer era hoy un enemigo, al menos ante la opinión pública. Ahora, había que reemplazar a dicho general por otro gobierno militar que no solo siguiera garantizando los intereses estratégicos de los EE. UU. en El Salvador, sino que también naciera con una imagen centrista, reformadora y democrática. Por eso, la administración de Jimmy Carter ordenó que se incluyeran algunos civiles en la Junta de Gobierno que había sucedido a la dictadura del general Romero.

Pero, el tiempo que no perdona a nadie, se encargó de demostrar que esos civiles nunca tuvieron poder de decisión. El verdadero poder siempre permaneció en manos de los nuevos militares en el poder, e incluso,

no en todos. La presencia de esos civiles en las tres Juntas de Gobierno solo pretendía dar la imagen de un cambio democrático. Nuevamente, el tiempo se encargó de demostrar el papel publicitario que la presencia de dichos civiles jugaba en esas Juntas de Gobierno. La mayoría de civiles renunciaron poco a poco; inclusive, muchos de ellos se exiliaron porque temían por sus vidas y las de sus respectivas familias.

Lo que Carter perseguía no era un cambio en las obsoletas estructuras de poder en El Salvador. Él solo promovió un cambio cosmético que diera la impresión de Juntas moderadas, reformistas y respetuosas de los derechos humanos, que ya se habían divorciado de las dictaduras militares anteriores. A finales de enero de 1980, activistas políticos de las llamadas Ligas Populares 28 de Febrero se tomaron pacíficamente la sede del Partido Demócrata Cristiano, en San Salvador. Con esa toma, ellos querían hacer presión a la Junta de Gobierno, para que liberara cientos de prisioneros políticos. José Napoleón Duarte, entonces líder de ese partido y figura aparentemente prominente en la Junta de Gobierno, junto al coronel Adolfo Arnoldo Majano, también miembro de esa Junta de Gobierno (considerado un militar moderado y no comprometido con violaciones a los derechos humanos), declararon públicamente que la Junta no intervendría para sacar a los ocupantes de dicha sede (De La Calle, 1980, El País).

Contrario a esas declaraciones, poco tiempo después, todas las personas ocupantes de la sede de ese partido político fueron masacradas con lujo de barbarie por agentes del Estado de El Salvador. La administración de Jimmy Carter nunca pidió una explicación sobre esos hechos a la Junta de Gobierno de El Salvador, pero siguió argumentando que el nuevo Gobierno salvadoreño había hecho progresos en cuanto a los derechos humanos. Y algo más, Carter permitió que el 13 de mayo de 1980, el coronel Adolfo Arnoldo Majano (sin antecedentes conocidos de viola-

ciones a los derechos humanos) fuera reemplazado en la Junta de Gobierno, por el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, de reconocida línea dura y con vínculos escuadroneros (Adam, 1980, p. 740). Esos hechos, indudablemente, demostraron que ni los civiles ni el único militar miembro de esas Juntas de Gobierno considerado como moderado tenían poder de decisión. Más aún, con esos hechos quedó demostrado que en El Salvador había habido otro cambio de Gobierno, pero no un cambio en las obsoletas estructuras de poder y mucho menos en el nivel de represión.

Esa masacre también demostró que la política de derechos humanos invocada por Jimmy Carter no era más que retórica. El día 23 de febrero de 1980, el fiscal general de la República de El Salvador fue asesinado en su residencia por un escuadrón de la muerte. En un programa televisivo, el entonces mayor Roberto D'Aubuisson (reputado por ser organizador de escuadrones de la muerte) ya había acusado al fiscal Zamora de ser comunista, subversivo y terrorista. El mayor D'Aubuisson había desarrollado la técnica de avisar públicamente quiénes serían sus próximas víctimas, toda vez que tuvieran un perfil público. La administración de Jimmy Carter nunca le exigió, al régimen salvadoreño, que le pidiera cuentas al mayor D'Aubuisson. Carter limitó su accionar a pedirle al ejército que se abstuviera de otro golpe de Estado, pero no demandó el esclarecimiento de ese asesinato (Adam, 1980, p. 739). El 28 de noviembre de 1980, los líderes del entonces Frente Democrático Revolucionario fueron secuestrados en plena luz del día con apoyo de fuerzas militares y policiales. Al siguiente día fueron encontrados los cadáveres de las víctimas con evidentes muestras de tortura. Carter limitó su accionar a expresar su preocupación, pero no demandó el esclarecimiento de esos asesinatos políticos (Adam, 1980, p. 739).

El día 2 de diciembre de 1980, las religiosas estadounidenses de la orden Maryknoll, Maura Clarke, Jean Donovan, Ita

Ford y Dorothy Kazel, fueron interceptadas por guardias nacionales en la carretera que del aeropuerto internacional conduce a la ciudad capital de El Salvador. Las religiosas fueron violadas y asesinadas (Rother, 1998, *The New York Times*). Bajo una enorme presión internacional, Jimmy Carter optó por suspender la ayuda militar a la supuesta reformista y centrista Junta de Gobierno de El Salvador, como una forma de presión, para que se investigara ese magnicidio (Pakistan Institute of International Affairs, 1980, p. 188). Irónicamente, dos semanas después, Jimmy Carter anunció que continuaría la ayuda militar a la Junta, dado los progresos en derechos humanos que, en su opinión, había observado, aunque el asesinato de las religiosas no se había esclarecido aún (Adam, 1980, p. 740).

La política exterior de derechos humanos de Jimmy Carter fue deliberadamente incoherente. Es decir, sus acciones siempre contradijeron sus argumentos teóricos sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos (Lowenthal, 1983, p. 66). Por ejemplo, días antes de terminar su período presidencial, Jimmy Carter reanudó más ayuda militar a la supuesta moderada y centrista Junta de Gobierno de El Salvador. Eso demostró que Carter nunca estuvo genuinamente sometido a la promoción del respeto a los derechos humanos, aunque en sus declaraciones públicas argumentara que sí era un acérrimo defensor de los derechos humanos (Lowenthal, 1983, p. 67).

El día 14 de enero de 1981, nuevamente Carter aprobó más ayuda militar a esa Junta de Gobierno. Por lógico que pueda parecer, quienes participan de la maquinaria que hace e implementa la política exterior de cualquier país, nunca hablan al unísono. Es decir, que no hablan con una misma voz, porque no coinciden en todo. En realidad, siempre hay discrepancias internas, pero donde manda capitán, no manda marinero. Por ejemplo, el día 17 de enero de ese mismo año, Robert White, el entonces embajador de los EE. UU.

en El Salvador, se quejó ante el Departamento de Estado de su país, de que, por ejemplo, la Junta de Gobierno de El Salvador no había tomado "acciones positivas", para solucionar el asesinato de las religiosas estadounidenses. Por lo tanto, en su opinión era inaceptable que el Pentágono le otorgara más ayuda militar a ese Gobierno. Sin embargo, un día después de la queja de Robert White, Jimmy Carter aprobó más ayuda militar a esa Junta de Gobierno (Adam, 1981, p. 748). Esto demuestra que, aunque Carter hubiera estado bien informado sobre la realidad de los derechos humanos en El Salvador, él tenía su propia agenda oculta.

Por razones de espacio, aquí no se ha entrado en detalles sobre todos los asesinatos políticos cometidos en El Salvador durante la administración de Jimmy Carter. Por ejemplo, se han tenido que omitir las masacres de manifestaciones populares tanto en la capital como en las áreas rurales. Pero aún así, mencionaremos que, el 22 de abril de 1977, la Unión Guerrera Blanca (uno de los tantos nombres usados, por los escuadrones de la muerte), amenazó a los jesuitas y otros sacerdotes, porque, en su óptica, ellos eran comunistas, subversivos y terroristas. El 18 de septiembre de 1978, fue asesinado el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador (UES), Carlos Alberto Rodríguez. El rector de la UES, Félix Ulloa, también fue asesinado, aunque en una fecha diferente. Para la Administración de Jimmy Carter, esos asesinatos no corroboraban la línea dura de sus protegidos sino que una mera disminución en las violaciones a los derechos humanos que su política exterior había conquistado en El Salvador.

Hubo un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos que nunca fueron publicadas por la prensa. Por ejemplo, antes de que Carter completara su periodo presidencial, la familia Lagos de Usulután ya era perseguida con perseverancia por el coronel Araujo, entonces jefe militar del cuartel de Usulután. A la familia Lagos le hicieron varios cateos, unos

en plena luz del día y otros amparados en la oscuridad de la noche. Finalmente, la persecución dirigida por el coronel Araujo produjo resultados, aunque no necesariamente los que él deseaba. Secuestraron a Luis y Moris Lagos, hermanos menores de Pilar Lagos [hijo] (a quien el coronel Araujo buscaba con sangrienta sed), y a Mauro Guevara, un empleado de la familia Lagos. Nunca pudieron capturar a Pilar Lagos (hijo), a quien el coronel Araujo le atribuía filiación subversiva, comunista y terrorista.

Pero, lamentablemente, Pilar Lagos (hijo) fue finalmente asesinado en plena luz del día, cuando lo ubicaron en San Salvador "unos hombres vestidos de civil, fuertemente armados, pero que no pudieron ser identificados". Esa fue la versión que *El Diario de Hoy* dio en su oportunidad. Lo que ese periódico no mencionó fue que esa víctima había venido siendo perseguida por el coronel Araujo desde hacía bastante tiempo. Tampoco se mencionó que el asesinato de Pilar Lagos (hijo) fue ordenado desde el Estado Mayor de ese tiempo; aunque el coronel Araujo no fuera miembro del Estado Mayor. Los coroneles se entendían entre ellos mismos, aunque no tuvieran quien les escribiera, como lo hubiera expresado el difunto escritor colombiano Gabriel García Márquez. Hasta esta fecha, quedan miles de casos similares que nunca fueron publicados ni, mucho menos, investigados. El expresidente estadounidense Jimmy Carter tiene bastante que responder ante la justicia terrenal, por todos los crímenes que el patrocinó y encubrió con su retórica de doble estándar sobre los derechos humanos.

Conclusión

En este artículo, se ha demostrado que el énfasis en la promoción del respeto a los derechos humanos que la política exterior de Jimmy Carter trato de promover no pasó de ser una medida cosmética para maquillar el mantenimiento de la hegemonía estadounidense sobre los países sometidos. Si, en verdad, Carter hubiera estado inclinado a

promover los derechos humanos, su retórica tendría que haber ido en paralelo con sus acciones; sin embargo, esto nunca ocurrió. Al contrario, la política exterior de Jimmy Carter demostró que para él los derechos humanos son de dos tipos: por un lado, en su visión política, los derechos humanos violados por las dictaduras que sirven a los intereses geopolíticos de los EE. UU. no tienen el mismo valor que los derechos humanos violados por los países que no se atienen a los dictados de Washington. Dicho en otras palabras: si los derechos humanos son violados por algún país que no se arrodilla ante los dictados de Washington, entonces ahí hay un caso extremadamente serio que requiere de la intervención salvadora de la Casa Blanca, aunque no se les haya pedido ese tipo de ayuda. Pero si los derechos humanos son violados por algún país que de una u otra forma, sirve a los intereses geopolíticos de los EE. UU., esos regímenes serán tratados por Washington de una forma diferente. Es decir, la retórica estadounidense tratará de minimizar la magnitud de dichas violaciones a los derechos humanos.

En el caso de El Salvador, Jimmy Carter demostró que su promocionado énfasis en los derechos humanos no pasó de ser una herramienta publicitaria más de su política exterior. Carter no solo fue hipócrita con el pueblo salvadoreño, sino que también con monseñor Óscar Arnulfo Romero. Al pueblo salvadoreño trató de demostrarle que las armas que su país enviaba a las Juntas de Gobierno no eran para seguirlos reprimiendo, aunque dichas armas seguían sirviendo para incrementar la represión. A monseñor Romero trató de convencerlo sobre el mismo tema; más aún, le aseguró que las nuevas Juntas de Gobierno no solo eran profesionales, sino que también eran centristas, reformadoras y democráticas. Pero al mismo tiempo, y a espaldas de monseñor Romero, Jimmy Carter le pedía, al papa de entonces, que controlara a dicho monseñor porque, en la óptica de la Casa Blanca, monseñor Romero se les había salido de su esfera de influencia. Y eso significaba,

que también el pueblo de El Salvador se podía salir del redil controlado por Washington.

Durante la Administración de Jimmy Carter, se dieron innumerables violaciones a los derechos humanos en El Salvador, tal como se ha demostrado en este artículo. Sin embargo, Jimmy Carter, en el peor de los casos, ignoró deliberadamente lo que sucedía; y en el mejor de los casos, pidió una investigación cosmética para mientras pasaba la tormenta política y mediática. A nivel internacional, la política de Carter demostró que se basaba no solo en un doble estándar de derechos humanos, sino que su pregonado énfasis en estos solo era una herramienta de su política exterior. Carter demostró ser solo un presidente más de los EE. UU. En otras palabras, los intereses estratégicos de los EE. UU. siempre primarán sobre los derechos humanos de los países sometidos. Carter recurrió al truco político de los derechos humanos, cosa que sus antecesores no habían hecho. Como buen presidente de los EE. UU., en ningún momento Carter estuvo dispuesto a que la hegemonía de su país fuera erosionada, por ninguno de sus subordinados. El realismo político de Carter siempre primó sobre su retórica liberal. Eso corroboró, que en los EE. UU. es posible cambiar presidentes, pero nunca la esencia criminal de su política exterior.

Referencias bibliográficas

- Adam, E. P. (1979). "Chronology 1979". *Foreign Affairs*, vol. 58, n.º 3, America and the World, pp. 738-774.
- Adam, E. P. (1980). "Chronology 198". *Foreign Affairs*, vol. 59, n.º 3, America and the World, pp. 714-742.
- Adam, E. P. (1981). "Chronology 1981". *Foreign Affairs*, vol. 60, n.º 3, America and the World 1981, pp. 719-752.
- Armstrong, D.; Farrel, T. and Lambert, H. (2007). *International Law and International*

- Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barkin, S. (2010). *Realist Constructivism: Rethinking International Relations Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bickerton, I. and Pearson, M. (1991). *43 Days: The Gulf War*. Australia: ABC Books.
- Brinkley, D. (1998). *The unfinished presidency: Jimmy Carter's journey beyond the White House*. New York: Penguin Putnam.
- CIA, Directorate of Intelligence, Intelligence Report: *The Committed Church and Change in Latin America*, Referencia: ESAU XLIII/69, SECRET RSS n.º 0039/69.
- Calvert, P. (1994). *The International Politics of Latin America*. Manchester: Manchester University Press.
- Carter, J. (1977). "Human Rights and Foreign Policy" (speech at the Notre Dame University, South Bond, USA).
- Constable, P. (2015). "Robert E. White, who criticized policy on El Salvador as U. S. ambassador, dies at 88". *The Washington Post*, January 15, 2015.
- Crabb, C. V. Jr. (1982). *The Doctrines of American Foreign Policy: The meaning, role, and future*. Louisiana: Louisiana State University.
- De La Calle, A. L. (1980). "Guerrilleros salvadoreños ocupan sede de la Democracia Cristiana". Periódico español *El País*. Recuperado en: http://elpais.com/diario/1980/01/31/internacional/318121219_850215.html
- Dunham, R. G. and Mauss, A. L. (1976). "Waves from Watergate: Evidence Concerning the Impact of the Watergate Scandal upon Political Legitimacy and Social Control". *The Pacific Sociological Review*, vol. 19, n.º 4, pp. 469-490.
- Forsythe, D. P. (2006). *Human Rights in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, (2ª ed.).
- Hargrove, E. C. (1988). *Jimmy Carter as President: Leadership and the politics of the public good*. Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press.
- Hartman, H. (2001). "US Human Rights Policy under Carter and Reagan, 1977-1981". *Human Rights Quarterly*, vol. 23, n.º 2, pp. 402-430.
- Herring, G. C. (2008). *From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776*. New York: Oxford University Press.
- Hitchins, C. (2001). *The Trial of Henry Kissinger*. London: Verso Press.
- Hutcheson, R. G. Jr. (1988). *God in the White House: How religion has changed the modern presidency*. New York: Collier Books.
- Lang, G. E. and Lang, K. (1980). "Polling on Watergate: The Battle for Public Opinion". *The Public Opinion Quarterly*, vol. 44, n.º 4, pp. 530-547.
- Ledeem, M. and Lewis, W. (1981). *Debate: The American Failure in Iran*. New York: Knopf.
- Lamperti, J. (2006). *Enrique Álvarez Córdova: Life of a Salvadoran Revolutionary and Gentleman*. North Carolina: McFarland & Company, Inc.
- Lowenthal, A. F. (1983). "Change the Agenda". *Foreign Policy*, n.º 52, pp. 64-67.
- Mariani, J. M. (2011). *Does It Still Matter? The Impact of the Vietnam Syndrome*

- on American Foreign Policy? CUERJ, College of Art and Sciences, University of Pennsylvania.
- McCormick, J. M. (2004). "The Foreign Policy of the George W. Bush administration", en *High risk and big ambition: The Presidency of George W. Bush* (2004) edited by S. E. Schier. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Modell, J. and Haggerty, T. (1991). "The Social Impact of War". *Annual Review of Sociology*, vol. 17, pp. 205-224.
- Murphy, G. (2005). *Hemispheric Imagings: the Monroe Doctrine and Narrative of U.S. Empire*. Durham: Duke University Press.
- Pakistan Institute of International Affairs (1979). "Chronology 1979". *Pakistan Horizons*, vol. 32, n.º 4, Pakistan Foreign Policy (Fourth Quarter, 1979), pp. 147-197.
- Pakistan Institute of International Affairs (1980). "Chronology June-August 1980". *Pakistan Horizons*, vol. 33, n.º 3, pp. 106-171.
- Pakistan Institute of International Affairs (1980). "Chronology December 1980". *Pakistan Horizons*, vol. 33, n.º 4, pp. 88-132.
- Pakistan Institute of International Affairs (1980-1981). "Chronology December 1980 – February 1981". *Pakistan Horizons*, vol. 34, n.º 1, The Inter-Relations of Muslim States and Pakistan, pp. 140-196.
- Presidential Directive/NSC-2, The White House, Washington, January 20, 1977.
- Romero, R. (2014). "Escuela de las Américas o Escuela de Violadores de Derechos Humanos?". *Estudios Centroamericanos* (ECA), vol. 69, n.º 739. San Salvador, El Salvador: ECA Editores.
- Scovazzi, T. and Citroni, G. (2007). *The Struggle against Enforced Disappearances and the 2007 United Nations Convention*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Schoenbaum, T. J. (2006). *International Relations: The path Not Taken-Using International Law to Promote World Peace and Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sick, G. (1985). *All Fall Down: America's Tragic Encounter with Iran*. New York: Random House.
- Slater, J. (1987). "Dominoes in Central America: Will They Fall? Does it Matter?". *International Security*, vol. 12, n.º 2, pp. 105-134.
- Sorensen, T. C. (1974). "Watergate and American Foreign Policy". *The World Today*, vol. 30, n.º 12, pp. 497-503.
- Stathis, S. W. (1983). "Nixon, Watergate, and American Foreign Policy". *Presidential Studies Quarterly*, vol. 13, n.º 1, pp. 129-147.
- Stohl, M.; Carleton, D. and Johnson, S. E. (1984). "Human Rights and U.S. Foreign Assistance cfrom Nixon to Carter". *Journal of PeaceResearch*, vol. 21, n.º 3, pp. 215-226.
- Strong, R. A. (2000). *Working in the World: Jimmy Carter and the Making of American Foreign Policy*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- The National Secutiy Archive: *Learn from History, 31st Anniversary of the Assassination of Archbishop Oscar Romero*. George Washington University.
- Retrieved from: <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSABB339/>

The USA Department of Justice (2012). Executive Office for Immigration Review, Immigration Court, Orlando, Florida, In the matter of: Carlos Eugenio VIDES CASANOVA (Respondent), In Removal Proceedings.

Tombs, D. (2001). "He is not here: Disappearance, Death and Denial", pp. 199-212 in Hayes, M. and Tombs, D. (eds.). *Truth and Memory: The Church*

and Human Rights in El Salvador and Guatemala. Herefordshire: Gracewing.

Vance, C. (1983). *Hard Choices*. New York: Simon and Schuster.

Williams, M. C. (2006). "The Hobbessian theory of international relations: three traditions", in Beate, J. (ed.), *Classical Theory in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.

